

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00600-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por CESAR COGOLLO DE HOYOS, LUIS PASTRANA PADILLA, WILLINTONG RODRIGUEZ MORENO, HAWER HURTADO HINESTROZA, JAINOVER AREIZA DAVID, JULIAN ANDRES CAICEDO y DARIO A. CAVABAL CARDENAS contra el EJERCITO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

ANTECEDENTES

Los señores CESAR COGOLLO DE HOYOS, LUIS PASTRANA PADILLA, WILLINTONG RODRIGUEZ MORENO, HAWER HURTADO HINESTROZA, JAINOVER AREIZA DAVID, JULIAN ANDRES CAICEDO y DARIO A. CAVABAL CARDENAS inician acción de tutela contra el EJERCITO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por considerar que se les está vulnerando el derecho fundamental de petición, al debido proceso e igualdad.

HECHOS Y PRETENSIONES

Indican los accionantes que son soldados profesionales del Ejército Nacional, y que presentaron ante esta entidad un derecho de petición a fin de que se expidiera certificación de salarios, constancia de tiempo en la institución y última unidad de servicios, el que no ha sido contestado.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Copia del derecho de petición presentado ante la entidad accionada el 10 de febrero de 2020.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 08 de septiembre de 2021, se ordenó la notificación de la convocada, para que en término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 08 de septiembre de 2021, se notificó al EJÉRCITO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- El EJÉRCITO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA, brindó contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA.

La entidad accionada refirió: “Revisado el Sistema de Gestión Documental del Ejército Nacional PQRS, se evidencia que los accionantes radicaron la petición 421576, objeto de amparo en esta Dirección de Personal, a la cual se le dio respuesta en fecha 28 de febrero de 2020.

Sin embargo, en aras de salvaguardar los derechos de los señores CESAR COGOLLO DE HOYOS, LUIS PASTRANA PADILLA, WILLINTONG RODRIGUEZ MORENO, HAWER HURTADO HINESTROZA, JAINOVER AREIZA DAVID, JULIAN ANDRES CAICEDO y DARIO A. CAVABAL CARDENAS, la Sección de Atención del Usuario de la Dirección de Personal, procede a generar respuesta mediante radicado No.2021313001887001, por el cual se procedió a remitir los certificados solicitados al correo anexo en la solicitud inicial y el adjunto en la acción de tutela con fecha 13 de septiembre de 2021 de lo cual nos permitimos anexar el soporte de envío.”

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, los ciudadanos CESAR COGOLLO DE HOYOS, LUIS PASTRANA PADILLA, WILLINTONG RODRIGUEZ MORENO, HAWER HURTADO HINESTROZA, JAINOVER AREIZA DAVID, JULIAN ANDRES CAICEDO y DARIO A. CAVABAL CARDENAS, se encuentran legitimados en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, el EJÉRCITO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA es una entidad del orden nacional, a quien se le aduce vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: *“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”*

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El

derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía". (Sent. T-220/94)

DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD

El artículo 13 de la Constitución Nacional refiere el derecho a la igualdad y establece: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica..."

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO

La jurisprudencia constitucional también ha establecido sobre el Debido Proceso que: "El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación.

El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite.

En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte del particular quede en manos del ente administrativo. Por lo cual, todo acto arbitrario de éste, entendido por

tal el que se aparta de las normas aplicables, para realizar su propia voluntad, implica violación del debido proceso.”

Ahora bien, se observa que la Corte ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela respecto al Debido Proceso, cuando se advierte o bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos judiciales de defensa.

Problema Jurídico

Corresponde a esta Juzgadora determinar si la entidad accionada ha vulnerado el derecho fundamental invocado por el accionante, tales como el derecho de petición, debido proceso e igualdad.

CASO CONCRETO

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6º, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Sin embargo, la regla general a la cual se ha hecho referencia, presenta excepciones:

a) Cuando el afectado sea un sujeto de especial protección constitucional, como lo son: los niños y las niñas, las personas que sufren alguna discapacidad, las mujeres embarazadas o los ancianos, por cuanto su situación de debilidad manifiesta impone el amparo mayor que la Constitución les brinda y, por ende, el estudio de fondo de sus asuntos.

b) Cuando la vulneración al derecho a la seguridad social implique un agravio a un derecho fundamental como la vida, el mínimo vital o el debido proceso¹.

c) Cuando los medios de defensa con los cuales cuenta el accionante, se tornan ineficaces para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos² o se pueda prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable³.

En el caso *sub examine*, se tiene que los accionantes elevaron el 10 de febrero de 2020, ante el EJERCITO NACIONAL, un Derecho de Petición mediante el cual solicitaban entre otras cosas, se les expidiera certificación de salarios, constancia de tiempo en la institución y última unidad de servicios.

De otra parte, el EJERCITO NACIONAL allega junto con la contestación a la presente acción constitucional, el oficio No. 2021313001887001 del 14 de septiembre de 2021, mediante los cuales, se acreditó haber dado respuesta a lo petitionado por los accionantes, procediendo con la expedición y entrega de los correspondientes certificados. Igualmente se advierte que la indicada comunicación fue remitida el 14 de septiembre a las direcciones electrónicas notificaciones@wyplayers.com y yacksonabogado@gmail.com, direcciones de notificaciones aportadas en el derecho de petición y la presente acción constitucional.

Así las cosas, se tiene que la entidad accionada ha resuelto de forma y fondo la solicitud elevada por los accionantes, conforme se evidencia en el oficio No. 2021313001887001 del 14 de septiembre de 2021, configurándose así un hecho superado respecto al derecho fundamental de petición.

Ahora bien, en atención al amparo solicitado al derecho al debido proceso e igualdad, advierte el Despacho que la acción de tutela instaurada es improcedente para acceder al amparo constitucional solicitado, pues no se acredita o avizora una vulneración a los derechos fundamentales, como quiera que los accionantes no indicaron haber iniciado ninguna actuación administrativa ante la entidad accionada, ni la existencia de un perjuicio irremediable que se esté causando con ocasión de una actuación u omisión de la accionada, sin que se pueda pasar por alto el principio de inmediatez que se busca a través de la acción constitucional como mecanismo alternativo, ante la vulneración de derechos fundamentales,

Así las cosas, tenemos que la entidad accionada ha resuelto las solicitudes elevadas por los accionantes, por lo que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada, pues no se avizora la existencia de la violación al derecho de petición al haberle sido resuelta la petición incoada, igualmente, no se avizora la existencia de la violación a los derechos fundamentales invocados como la igualdad o debido proceso, por lo que, con fundamento en lo brevemente expuesto, este despacho denegará la tutela impetrada.

¹ Sentencias T-905 de 2008, T-850 de 2008, T-1083 de 2001 y T-038 de 1997.

² Sentencia T-1268 de 2005.

³ Sentencia T-1083 de 2001.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por los señores **CESAR COGOLLO DE HOYOS, LUIS PASTRANA PADILLA, WILLINTONG RODRIGUEZ MORENO, HAWER HURTADO HINESTROZA, JAINOVER AREIZA DAVID, JULIAN ANDRES CAICEDO y DARIO A. CAVABAL CARDENAS** por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

**Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 030
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

b743f154ed62fcd9b912f95056bc1907b4c1001c208a57dcf7b1a46ff66cf772

Documento generado en 17/09/2021 04:58:22 p. m.

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**